

No nos estamos desplomando todavía pero...

Manuel Rojas Bolaños*

Muchas gracias a CIAPA y a su Director Académico, don Constantino Urcuyo, por invitarme a comentar la ponencia presentada por mi amigo y colega don Jorge Vargas Cullel.

Esta ponencia merece un examen y una discusión detenida, dadas las informaciones, interpretaciones y propuestas que contiene. Escapa a las posibilidades de este comentario un examen de esas características, así que lo que voy a decir es una mezcla de reacciones a lo dicho por don Jorge y de reflexiones de mi propia cosecha sobre la situación del país y sus posibles líneas de evolución.

Una lente sociológica

La ponencia está estructurada alrededor de una premisa: el sistema [político] no está al borde del colapso y cuenta con mecanismos y recursos para enfrentar los problemas que sufre en el ámbito de la representación, la eficacia y la polarización política.

Pese a ello don Jorge nos advierte que por primera vez en por lo menos dos décadas, el sistema se ha vuelto vulnerable a episodios de inestabilidad política y que por tanto, dependiendo de las decisiones que adopten o dejen de adoptar los actuales actores políticos, la democracia costarricense puede llegar a estar en grave peligro de continuidad.

Concuerdo con que el sistema no está al borde del colapso, pero tengo dudas acerca de si realmente se cuenta con mecanismos y recursos para enfrentar los problemas que eventualmente podrían llevarlo a una situación complicada. Ciertamente, la relativa estabilidad mantenida a lo largo de muchas décadas es un factor amortiguador, pues ha creado una cultura política esencialmente democrática, aunque habría que precisar que significa eso; también cuentan los resultados positivos sobre el conjunto de la población de la imbricación entre economía y política que se logró después de la crisis de los años treinta y los acontecimientos de los años cuarenta, y que arrojó una sociedad con un alto grado de integración social.

No obstante, me parece que no se puede confiar demasiado en la pervivencia de las herencias del pasado, porque esta sociedad ha cambiado radicalmente. Junto con la modernización ha cambiado la base material que daba sustentación

* Sociólogo político, profesor investigador de la Sede Académica de la FLACSO en Costa Rica y miembro de la Comisión Coordinadora del Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

a la idea de una nación integrada por pequeños campesinos y prósperas clases medias urbanas. Hay una discordancia cada vez mayor entre esa idea y la base material de la sociedad, con efectos diversos en la identidad nacional, en la cultura política, en las relaciones entre grupos y clases sociales.

Esta sociedad se ha vuelto más compleja en su integración y en su estructura. Las clases sociales de antaño han desaparecido o están en vías de hacerlo, pero otras divisiones sociales han aparecido, provocando desajustes no solamente en cuanto a ingresos, sino también en lo que se refiere a estilos de vida, patrones de consumo, valores y visiones de la vida en sociedad.

Hoy en día somos una sociedad con mayores desigualdades sociales, una sociedad pluricultural y multiétnica, lo que se distancia mucho de la imagen de una nación integrada básicamente por labriegos sencillos, como dice el himno nacional, blancos, con similares condiciones de vida y enfoques de la vida en sociedad. Nunca fuimos así, por lo menos no exactamente así; pero la identidad que se construyó sobre esa ficción funcionó porque en algo reflejaba la realidad de entonces.

La complejidad presente se ha visto aumentada con la presencia de un importante componente poblacional de origen nicaragüense, que ya tiene un enorme peso económico, pero que seguramente en los próximos años comenzará también a tener peso político. Un componente poblacional diferenciado, aunque la mayoría ciudadana lo mira como un bloque integrado por solamente los emigrantes pobres, que desempeñan oficios o prestan servicios que han dejado de ser atractivos para los costarricenses; ignora la presencia de profesionales y empresarios con fuertes inversiones en actividades financieras y productivas. Los últimos son bienvenidos, mientras que los primeros sufren las consecuencias de la xenofobia, aunque su impacto en la economía es también muy importante. En fin una presencia que está introduciendo transformaciones en las bases sociales y culturales del país.

Esta transformación de la sociedad costarricense impide una comprensión de la política estrictamente desde lo político, inevitablemente la mirada tiene que hacerse a través una lente sociológica, para hablar metafóricamente, so pena de mal interpretar las señales. Esta complejidad social no puede expresarse más políticamente a través los esquemas partidistas y en general organizativos provenientes de otras etapas históricas. El bipartidismo ha quedado atrás, por lo menos el viejo bipartidismo, pese a la añoranza que provoca en algunos actores políticos, que se niegan a reconocer la transformación sufrida. El multipartidismo moderado que ha empezado a configurarse no es el producto solamente de ambiciones o intrigas personales, sin negar su existencia, sino de necesidades sociales.

Una situación que indudablemente hará más difícil pero no imposible la interlocución social y la búsqueda de consensos en torno a decisiones que modifiquen tanto el sistema político como el conjunto social; las dificultades

deben verse como un acicate para la búsqueda de un nuevo estadio de gobernabilidad en las actuales condiciones políticas y sociales del país. La real o supuesta ingobernabilidad no se resuelve mirando hacia el pasado y eludiendo los retos del presente.

El llamado apoyo difuso a la democracia –en los términos definidos por Easton-- como lo muestran los datos del Latinobarómetro sigue siendo importante; no obstante, también podría deteriorarse como producto de esa complejidad, en la medida en que la institucionalidad pública que dio sustento a ese apoyo se muestre incapaz de dar respuestas a las viejas y nuevas demandas sociales. En ese sentido preocupa el grado de satisfacción con el desempeño de la democracia, que según esa misma fuente es más bien bajo: solo 39 de cada cien personas manifiestan satisfacción con ese desempeño.

Una luz de alerta. No nos hemos despeñado aún, pero como lo indica el autor de la ponencia que comento, los próximos años van a ser cruciales en el logro de acuerdos que reestablezcan los equilibrios en otro nivel, porque el pasado es irrecuperable y las restauraciones no son posibles. Lamentablemente, es posible que asistamos a intentos de restauración que no van a solucionar los problemas planteados, pero que podrían complicar la situación. En todo caso la restauración solamente puede ser parcial, porque, para empezar hay partidos y dirigentes políticos que no van a volver a ocupar las posiciones preponderantes del pasado y el gobierno que emerge de las elecciones de 2006, tendrá que negociar con nuevos actores políticos.

En cuanto a las instituciones del Estado de derecho, si bien es cierto que ofrecen garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos, no podemos olvidar que el Poder Judicial tiene problemas todavía sin solucionar y que el tema de la corrupción política ha introducido nuevas tensiones y creado otras expectativas en la ciudadanía. El resultado de los juicios que seguramente se llevarán a cabo en los próximos meses, pondrá a prueba nuevamente el prestigio de los tribunales.

Los resultados agregados de encuestas son generalmente favorables al Poder judicial, pero hay que tener cuidado porque a veces resultan engañosos, dado que por tal Poder las personas entrevistadas entienden cosas diferentes y tienden a confundir dependencias específicas con el conjunto. Cuando en las encuestas se pregunta concretamente por los tribunales de justicia o por el desempeño de los jueces, las opiniones no son tan favorables como en la evaluación general.

Lo externo también juega

El sistema no puede verse aislado del contexto internacional. Conociendo bien al autor, sé que ese aspecto lo tiene muy claro; sin embargo, en la ponencia que comentamos este factor está desdibujado. Lo señalo porque creo que, como

bien lo dice Manuel Antonio Garretón,¹ el centro de las decisiones que importaban en economía y política se ha desplazado del Estado nacional hacia otros ámbitos. Hoy en día, y esto es válido para todos los países de América Latina, hay poderes que están fuera de la base territorial del Estado, que tienen influencia decisiva en el rumbo de los acontecimientos. Poderes que escapan del control o regulación del Estado nacional. Se trata, como los califica Garretón, de “poderes económicos que atraviesan los espacios nacionales y reorganizan las economías a partir de su inserción, siempre fragmentaria, en la economía mundial.”

Con estos señalamientos no busco colocar excesivamente el énfasis en lo externo; lo que intento decir es que muchos de los problemas planteados por el sistema son en mucho resultados no buscados ni esperados de ese entorno, y, por esa razón, no se pueden resolver solamente en el plano local; seguramente mucho se puede hacer para mejorar las cosas, pero siempre existirá una zona de incertidumbre, y más en un país pequeño donde, además, no se tiene claridad en materia de política exterior y por tanto se carece de acciones coherentes y prolongadas en una misma dirección a lo largo del tiempo. En otras palabras, un país en donde no existe una estrategia de inserción en la economía mundial que evite las consecuencias internas negativas, tanto sociales como políticas. Esta carencia tiene que ver con la crisis de los partidos, pero también con la debilidad de la sociedad civil y con el hecho de que muchos de los actores políticos y sociales carecen de una visión de largo plazo.

Como bien lo señala el autor de la ponencia: “...las actuales circunstancias son cada vez menos normales en relación con la experiencia histórica de las últimas décadas”. Esa anormalidad nos coloca en una situación enmarañada porque la mayoría de los actores políticos siguen mirando hacia el pasado, recurriendo a una limitada y gastada farmacopea, en una especie de paralización que impide la innovación dentro de las posibilidades que ofrece el sistema. Tengo serias dudas sobre la capacidad de algunos de los actores políticos para entender la situación actual, su gravedad, y actuar en consecuencia.

Aparte de estos poderes externos, las elites políticas tienen que bregar también con un conjunto de poderes fácticos en el plano nacional, como los medios de comunicación, los grupos empresariales, y los sectores sociales organizados, que rivalizan en el plano político, pero que no están sujetos, en su constitución a la competencia electoral ni sufren periódicamente el escrutinio ciudadano. Lo que intento decir es que en el plano político hay viejos y nuevos actores, que a veces facilitan y otras entorpecen el accionar de los partidos y los gobiernos.

El origen de la situación actual

¹ Garretón, Manuel Antonio, “¿Polis ilusoria, democracia irrelevante?”, TODAVÍA, Nº 2, setiembre 2002, <http://www.revistatodavia.com.ar/index2.html>.

Ahora bien, don Jorge Vargas señala como causa fundamental de la situación actual, la discordancia entre democratización y bases materiales de sustentación, entre demandas e imposibilidad de respuesta debido a los problemas de recursos escasos e inadecuaciones en el diseño institucional. Dice textualmente: “Debido a que la democratización se desarrolló sin que simultáneamente los partidos políticos actuaran sobre otras variables institucionales y fiscales, ello fue progresivamente creando una situación insostenible: más democracia pero menor capacidad institucional para la acción pública, tanto por un diseño institucional cada vez menos funcional como por crecientes restricciones fiscales. Hoy en día, es difícil seguir avanzando en el proceso de democratización sin cambios institucionales y fiscales progresivos que permitan llenar de contenido los derechos y obligaciones promulgadas”.

Es decir, que “la democratización de la democracia” llevó al sistema al límite de su capacidad para procesar las demandas crecientes de la población. Así planteadas las cosas, la situación actual entonces podría definirse en los términos clásicos de una crisis de gobernabilidad, que no puede resolverse como lo recomendaba la llamada Comisión Trilateral en los años setenta, reduciendo las demandas. Eso no es precisamente lo que piensa Jorge Vargas. Insiste, eso sí en la necesidad de realizar cambios importantes en el sistema político, las instituciones y las políticas públicas, so pena del estancamiento de la democratización y la nueva economía.

El país se encuentra entonces al final de una era política.² O de un bloque histórico, agregó yo, usando la terminología de Gramsci. Un bloque histórico que comenzó a conformarse después de la crisis de los años treinta, pero que emerge claramente después de la guerra civil de 1948. Un bloque histórico con su base económica, sus clases y sus alianzas de clase, sus intelectuales orgánicos, una institucionalidad correspondiente y mecanismos de representación política más o menos conformes con el ordenamiento social. Dentro de ese esquema seguramente el bipartidismo de hecho o de derecho era pieza fundamental. En fin, un bloque histórico que no estaba exento de contradicciones, pero, en general, con una integración sociopolítica elevada, que permitía bregar con las contradicciones. Para las demandas, como bien lo señala don Jorge Vargas en su planteamiento, había respuestas, haciendo uso de recursos internos o recurriendo al endeudamiento externo.

² Dicho sea de paso, “Final de una era” fue el título de una ponencia que presenté hace muchos años, en un Congreso Centroamericano de Sociología que se celebró en San José en 1982. Aunque la argumentación dada entonces parece insuficiente, vista con los ojos de hoy, el hecho es que ya para entonces se percibía la crisis de finales de los setenta y principios de los ochenta, como un parte aguas entre una sociedad y un estilo de conducción de la institucionalidad estatal y otro que comenzaba a perfilarse, dando al final como resultado un estado y una sociedad diferente.

Ese bloque histórico entra en problemas en los años ochenta, se tambalea pero logra sortear la crisis gracias a la situación política regional. El deterioro económico se logra frenar vía ayuda externa y en pocos años se produce una recuperación que evita el estallido social. Lo externo apuntala lo interno y salva al país del derrumbe social y político; le permite un breve período de respiro, pero la transición se había iniciado, proceso que solamente empieza a ser visible desde mediados de los años noventa. Seguramente el Pacto Figueres Calderón y la huelga de educadores de 1995, son los eventos que hacen visible el resquebrajamiento sufrido y marcan la disgregación de las comunidades políticas, la extensión del desaliento y el crecimiento del descreimiento político. Las denuncias formuladas en 2004 en torno a supuestos actos de corrupción en las cúspides de los partidos y las instituciones del estado, es una especie de acción de “dar la puntilla” a un proceso que se inició mucho tiempo atrás.

¿Transición hacia qué? Una pregunta difícil de contestar. Conocemos lo que dejamos, pero todavía no sabemos hacia donde vamos. No hay una meta trazada. Todavía priva el desconcierto y también, en algunos sectores, la idea de la restauración. Volver a una época en la que nos movíamos sobre terreno conocido, al menos eso es lo que pensábamos, porque la realidad se ha encargado de mostrarnos que el terreno estaba lleno de cavernas, que era terreno falseado que podía derrumbarse.

Esas cavernas no fueron detectadas por nuestros análisis de superficie y con nuestros limitados instrumentos.³ La ciencia política local ha recibido en estos años una lección, lección que era sabida pero que olvidamos: no quedarse con las apariencias, buscar lo que está detrás de ellas. En un afán desmedido por medir, le otorgamos a las encuestas una posibilidad de conocimiento que no tienen, así como también a los juegos de artificio que nos proporciona el instrumental de la ciencia política norteamericana. No es que carezcan de utilidad, pero tienen limitaciones. El acercamiento a una interpretación más cercana a la realidad pasa por un replanteamiento de los procedimientos. Habrá que rascar en el futuro con más fuerza la superficie para encontrar lo que se encuentra debajo de ella; la comprensión de los signos de los tiempos pasa necesariamente por ese ejercicio.

Así las cosas, como lo indica el autor, “distintos y marcadamente cursos de evolución son posibles”, por supuesto dentro de las limitaciones y posibilidades que ofrece el contexto global. Siguiendo nuevamente a Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo tampoco nace; hay un cúmulo de oportunidades pero también de peligros. Cuál será entonces el curso elegido y cuáles son las

³ Me refiero al conjunto de diagnósticos y análisis diversos que se hicieron en los últimos diez años sobre la situación del país. Se detectaron algunas manifestaciones pero se anduvo lejos de señalar algunas de las causas y, sobre todo, las perversiones del sistema.

consecuencias para el futuro de esta sociedad, son las interrogantes clave del momento. Ese es el contexto en que se realizan las elecciones de 2006.

Elecciones en la transición

Al gobierno que emerja de esas elecciones no podemos endosarle la responsabilidad histórica de resolver los problemas planteados, ni tampoco dicho gobierno puede aspirar a conseguir esa meta. La delegación y el mesianismo son tentaciones que hay que eludir. No se trata solamente de elegir a los más aptos o los que mejor venden su real o supuestos conocimientos, experiencia y claridad en el rumbo a seguir. Tengo la impresión que no se trata solamente de un problema de falta de liderazgo, de firmeza o de decisión. Me parece que el rumbo de los acontecimientos terminará siendo definido socialmente.

Esa intuición se apoya en un hecho: el proceso electoral ha servido para que afloren, en ausencia de propuestas partidarias viables y oportunas --porque se dice que hay grupos partidarios pensando, pero ahora, en la coyuntura electoral, cuando debieron hacerlo desde hace mucho tiempo y plantear acciones a través de las respectivas fracciones parlamentarias--, un conjunto de iniciativas y pronunciamientos de grupos diversos de la sociedad civil: la iglesia católica, los empresarios, las organizaciones gremiales y sociales, los intelectuales, los medios de comunicación y otras instancias como el esfuerzo realizado por FLACSO-PNUD. Propuestas que seguramente tienen muchos puntos en común y también grandes divergencias, pero que sirven de base para una discusión ordenada sobre lo que sucede en el país y las posibilidades de solución a los problemas. Para que eso pase algunas de ellas tendrán que ser asumidas por sectores sociales más amplios. De otra forma partidos y gobiernos las ignorarán pese a la riqueza de su contenido.

Por esa razón pienso que la responsabilidad mayor del gobierno que emerja de las elecciones de febrero de 2006, no es la definición del rumbo de la transición en la soledad de la cumbre, sino la creación de condiciones para que el conjunto social pueda ordenadamente expresarse e ir negociando. El nuevo gobierno puede acelerar o retrasar dicho proceso. Pero también, como lo indica el autor de la ponencia, todos los actores, tanto los viejos como los nuevos, tienen en sus manos una gran responsabilidad.

Probablemente en condiciones de buen funcionamiento de partidos y Asamblea Legislativa, esta sería la arena ideal para confrontar diferentes visiones y proyectos, y negociar salidas que contemplen en alguna medida los intereses de los diversos sectores sociales. Pero en el futuro inmediato los partidos seguirán siendo débiles tanto en el plano de la formulación de políticas públicas, como en el de representación y canalización de demandas ciudadanas, es decir, que continuarán siendo fundamentalmente andamios electorales.

El vacío dejado por los partidos continuará siendo llenado por los medios y los grupos corporatistas, en una lucha por imponer sus intereses. Unos y otros hablando a nombre de la colectividad nacional o alegando que buscan el interés nacional. En las definiciones de política seguirá también siendo esencial la intervención entre bambalinas de elites, a partir de la interacción entre gobiernos y grupos de interés, pero con predominio de los grupos empresariales.

Ahora bien, si por las claras se saca el día, como reza el dicho popular, lo que ha sucedido hasta ahora en el proceso electoral nos indica que aún no han madurado las condiciones para que algunos de los actores sociales y políticos estén dispuestos a admitir la gravedad de la situación y la necesidad de comunicarse y negociar. Hay algo de “juego suma cero” en algunos de esos actores. Aunque en el plano del conflicto social, en lo inmediato no veo síntomas de enfrentamientos tipo años cuarenta, sino una etapa marcada por escaramuzas aisladas y una acentuación, cuando menos por un tiempo de duración media, del actual escenario de posiciones fijas.

Es probable que los procesos electorales no constituyan los mejores momentos para la confrontación de proyectos; sin embargo, por lo ocurrido en el país en los últimos tiempos, era de esperar algunos cambios en la forma de plantear la campaña electoral por parte de los diferentes candidatos. El comportamiento del conjunto de la ciudadanía nos indica que efectivamente las cosas han cambiado: una ciudadanía pasiva, descreída, desconfiada, apática. Limitadas muestras de abierta adhesión política. Porcentajes elevados de personas que no manifiestan opinión en los sondeos.

Pero los políticos no parecen haberlo entendido. Hemos asistido entonces a un limitado debate electoral (asuntos escogidos por expertos mediante el análisis de encuestas), profundamente marcado por el marketing político y por el espectáculo. El lugar del debate ha estado ocupado por un diseño propagandístico que ignora los posibles cambios ocurridos en la cultura política.

Buena parte de los votantes se ha decidido por una determinada fórmula presidencial por el temor a que la situación del país se complique aún más si determinados candidatos ganan o pierden. Hay temor a un gobierno como el presidido por el Presidente Pacheco. Las decisiones ciudadanas no están entonces basadas en la identificación con una propuesta, un ideario o una trayectoria. De todas maneras la mayoría de los partidos trata de navegar dentro de una especie de centro derecha, sin ignorar que el Movimiento Libertario y el Partido Acción Ciudadana han sido mucho más transparentes en sus planteamientos, sobre todo en temas como el TLC, la reforma fiscal y la modernización del estado costarricense. En la mayoría de los casos, detrás de una palabrería efectista se ocultan intenciones que el limitado debate no permite develar.

Si como hemos afirmado, la sociedad costarricense en su actual etapa histórica necesita expresarse políticamente a través de varios partidos, y que, por tanto, la reconstrucción de un sistema bipartidista, que nuevamente de sólido sustento al régimen presidencial es prácticamente imposible, el reto a enfrentar entonces es el pluripartidismo ineficiente, como ha ocurrido en los últimos cuatro años dentro de la Asamblea Legislativa.

Una de las salidas posibles a esa situación implica la modificación del régimen político, lo cual no solo parece ser sumamente riesgoso en la actual situación del país, sino prácticamente imposible. La otra salida es la búsqueda de una democracia consociacional o consensual, basada en los compromisos alcanzados entre los distintos partidos presentes en la Asamblea Legislativa. En este caso, sin embargo, el requisito es partidos que funcionan permanentemente, con plataformas más o menos estables a mediano plazo, con vocación de negociaciones y compromisos, y con posibilidades de respetar dichos compromisos a lo largo de un determinado número de años.

Esa no es precisamente la situación de Costa Rica en el momento actual, donde, como ha sido señalado, la debilidad de los partidos es notoria. Para subsanar dicha debilidad sería necesario introducir un conjunto de modificaciones, de manera tal que la ciudadanía vuelva a creer en el mecanismo de la representación. Modificaciones que pasan entonces, en primer lugar por la forma de integración de la Asamblea Legislativa. Hay que avanzar hacia un sistema que permita a la ciudadanía mayores posibilidades de selección de los candidatos, lo que implica también por una ampliación del número de diputados, y una mayor definición del carácter de su representación (nacional y regional). Es necesario cambiar también el sistema de elección, eliminando algunos de los elementos que favorecen a los grandes partidos y que son un vestigio de la etapa bipartidista. Además, debe volverse a analizar todo lo relativo a la reelección, tanto en el plano presidencial como en el legislativo.

Algunas de estas reformas fueron planteadas desde principios de los años noventa. Lamentablemente su aprobación fue postergada y luego desechada, en la creencia que la situación imperante favorecía a los partidos que controlaban el intercambio parlamentario. A la postre esa postergación operó como una especie de bumerán que golpeó a esos mismos partidos.

En todo caso, la renovación de los partidos y el sistema de partidos implica una renovación de las relaciones con la sociedad civil. En la actual etapa de desarrollo de la sociedad costarricense los partidos no pueden aspirar al mantenimiento del monopolio de la política, y sus formas de organización tendrán que ser mucho más abiertas, de manera tal que les permitan una relación más cercana con la sociedad civil. Van a tener que coexistir con otros actores en las arenas que antes ocupaban solitariamente.

Hasta aquí las reflexiones que me ha provocado la lectura de la interesante ponencia del Dr. Vargas Cullel, a quien felicito por permitirnos asomarnos tan sistemáticamente a la realidad política actual del país, con sus amenazas y sus oportunidades.

San Ramón de Tres Ríos, noviembre de 2005.